

### **Estupor por plan de salud de AMLO**

Aunque se plantea como documento inicial de discusión, el programa de salud planteado por el gobierno al relevo, en la mira de crear un sistema único y público, ha provocado algo más que un levantamiento de cejas entre las instancias académicas, organismos de planeación en la materia y organizaciones empresariales. La posibilidad plantea una sacudida general a la estructura, oscilando desde la desaparición del Seguro Popular hasta la creación o recuperación de hospitales que se destinarán a uso indistinto de las instancias de salud pública.

El primero se sustituirá por una política de servicio de salud y medicamentos gratuitos en cuyo marco seguirían interactuando los Sistemas Estatales de Salud, sólo que las partidas presupuestales se entregarán en especie o estrictamente etiquetadas mediante convenios previos, para evitar desvíos o fraudes. El único requisito para incorporarse a éste será no estar afiliado al IMMS o ISSSTE.

El esquema de compra consolidada de medicamentos se ampliará al infinito, pero su rectoría ya no estaría en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino en la Secretaría de Salud. La revolución plantea, decíamos, que los hospitales en proceso o suspendidos serán terminados, para en el futuro los que se entregan ofrezcan servicio universal, es decir, que se puedan utilizar indistintamente por las instancias.

En la sacudida general se analiza la posibilidad de confluencia institucional entre la red de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, para una posible complementariedad de los servicios, y se revisará la magnitud de la subrogación parcial o total de servicios costosos, por ejemplo, la hemodiálisis. En la ruta se haría un análisis integral de la estructura organizativa de las direcciones médicas del IMSS y del ISSSTE para ubicar confluencias o discrepancias de las estructuras centrales.

La meta final será la implantación del Sistema Único y Público de Salud de acceso universal, bajo la tutela de la Secretaría de Salud en funciones de autoridad sanitaria nacional, en cuyo marco la prestación de servicios no será discriminada, como resulta con el Seguro Popular, aunque se reconoce que el proceso enfrenta dificultades por múltiples diferencias legales, laborales, grados de institucionalización estable, de culturas y prácticas institucionales y organizacionales. El documento pone en la mesa los dos modelos ubicados hasta hoy en la búsqueda de la anhelada seguridad universal. Sin embargo, no se especifica cuál sería el paquete de servicios a incluirse.

El segundo lo plantearon en su momento las bancadas del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados, proponiendo la portabilidad como eje, es decir, que los derechohabientes se atiendan indistintamente en las instancias públicas, incluida la elección de quién será el administrador de los recursos. La opción plantea un

paquete de servicios igual... con opción a ampliarlo vía el pago de un seguro adicional. La prioridad, por lo pronto, apuntaría a las entidades federativas más desprotegidas en la materia, es decir, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Veracruz. Apuntes para la polémica

**Mejora regulatoria.** Pionero en el manejo de una política que frena la multiplicidad de trámites burocráticos, el gobierno de Hidalgo ha logrado simplificar 730 de ellas, lo que generará ahorros a los usuarios por 700 millones de pesos. La agenda habla de disminuir de 100 a siete y de 29 a tres los días requeridos para obtener licencias de funcionamiento de negocios y de construcción, respectivamente.

**COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ.** Septiembre 04 del 2018

### ***El gasolinazo de Peña, un beneficio para AMLO***

El proceso de liberación de los precios de las gasolinas era necesario, pero desde el principio fue mal implementado. Es muy difícil que se pueda socializar y que se logre un entendimiento generalizado que lo peor que le podía pasar al país era tener precios controlados y subsidiados porque eso costaba muy caro a las finanzas públicas. Este país que vivió del espejismo petrolero durante tantos años, hizo de las gasolinas subsidiadas un derecho inherente a los mexicanos. Esto retrasó el proceso de apertura de ese mercado. Vamos, ya era libre el precio de las tortillas cuando las gasolinas de alto octanaje todavía mantenían subsidios.

El primer acercamiento a la apertura de los combustibles se dio en el 2016. El paquete económico de ese año planteó una apertura topada para evitar un disparo en los precios. Pero la mano del populismo en el Congreso se encargó de limitar este tope de aumento apenas a 3 por ciento. El gobierno federal lo permitió y ése fue un primer gran error. Para el 2017 ya era inevitable el proceso de apertura, porque así lo marcaban los tiempos de la reforma energética. La mala suerte acompañó a la determinación de dejar a la oferta y la demanda los precios de las gasolinas Magna, Premium, el diesel y el gas licuado de petróleo. Por aquellos días de inicio del 2017 los precios de los energéticos subían en el mundo, tras muchos años de estancamiento.

Ya todos conocemos el impacto del gasolinazo en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Desde el golpe inflacionario, del que todavía no logramos salir, hasta el dulce platillo político servido a una oposición permanentemente en campaña. El gobierno de Enrique Peña Nieto nunca pudo manejar adecuadamente la comunicación de esa decisión y se sumó a sus pasivos políticos con costos electorales. Otra vez, va a ser muy difícil que se pueda dimensionar entre la mayoría de los ciudadanos que ésta fue una medida adecuada.

Va a ser complicado entender que las gasolinas son una fuente de ingresos fiscales ante la ausencia de un esquema tributario adecuado. Siempre será la infeliz decisión del gobierno de Peña Nieto de castigar con un gasolinazo al pueblo bueno. Lo que el gobierno entrante debería hacer con el gasolinazo de Peña Nieto, del que tanto

beneficio electoral sacaron en las pasadas elecciones, sería archivar el expediente de su queja permanente y gozar de las mieles de la apertura del mercado.

Porque a partir del 1 de diciembre próximo, el gran beneficiado del gasolinazo será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ante los enormes planes de gasto que tiene la próxima administración y su decisión expresa de no modificar impuestos, esta fuente de ingresos es un salvavidas para el gobierno de López Obrador. Regresar a un esquema de subsidios a las gasolinas, como lo prometió en campaña, sería un error de finanzas públicas terrible. Disminuir el poder recaudatorio de los combustibles también tendría algún impacto en las finanzas públicas.

Así que lo mejor que puede hacer el gobierno entrante es gozar de las mieles del enorme desgaste político que sufrió Peña Nieto con el gasolinazo y disfrutar de esa corrección estructural tan importante que se hizo al gasto público federal.  
[ecampos@economista.com.mx](mailto:ecampos@economista.com.mx)